CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

COMISIÓN DE JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ

celebrada el jueves, 27 de septiembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:

— Dictaminar con competencia legislativa delegada el Proyecto de ley de conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones. (621/000108).

Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. En primer lugar, el señor letrado comprobará la asistencia de los señores senadores.

Por el señor letrado se procede a la comprobación de las señoras y los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Seguidamente, corresponde la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Como el acta consta en poder de todos ustedes, supongo que consideran innecesario proceder a su lectura. ¿Alguna consideración en contra? *(Pausa.)*

Por lo tanto, queda aprobada.

Pasamos al dictamen del proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas de las redes públicas de comunicación.

A este proyecto de ley, que la comisión tramita con competencia legislativa delegada, se han presentado 36 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 10 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, 4 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, una del Grupo Parlamentario Socialista y 21 del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia se ha reunido en la mañana de hoy y, si bien ha estudiado las enmiendas presentadas, ha resuelto no emitir informe formalmente.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas números 23 a 32 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Intervengo para darlas por defendidas en sus justos términos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zubia.

Enmiendas números 33 a 36 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor BOFILL ABELLÓ: Aunque ya tendré ocasión de explicarlo en el turno de portavoces, queremos que conste la retirada de nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Enmienda número 22 del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Lavilla tiene la palabra.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de pasar a la defensa de nuestra enmienda, quisiéramos hacer constar un error de redacción, referido al secreto de las comunicaciones. El punto dos de la disposición final primera «o) donde dice: ...los datos establecidos en la ley, debería decir «en este artículo». Se trata simplemente, repito, de un error de redacción que queríamos hacer constar para su corrección.

El señor PRESIDENTE: Señorías, si ninguno de los grupos parlamentarios tiene inconveniente, así constará en acta. Adelante, señor Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

La enmienda número 22 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la que solicitamos el apoyo de sus señorías, se refiere al desarrollo del artículo 33, concretamente al punto 2, de la Ley 32/2003, relativo a la interceptación legal de las comunicaciones. Teniendo en cuenta que se trata de un reglamento y no tiene rango de ley, daríamos seguridad jurídica a las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, Policía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si, tal y como dice el punto 2 de este artículo, las interceptaciones se realizasen de acuerdo con el seguimiento del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 2/2002. Con ello daríamos rango legal a un reglamento ya existente.

Por lo tanto, esta enmienda propone simplemente una mejora técnica y no limita ningún derecho, pues se circunscribe al seguimiento del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esperamos contar con el apoyo de sus señorías, si así lo estiman oportuno, para la aprobación de la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla. Pasamos a continuación a la defensa de las 21 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Ramírez, tiene la palabra.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular hacen hincapié en que esta ley debe ocuparse de los delitos más

graves. Este sería el fruto del acuerdo alcanzado en el Congreso. De esta forma, consideramos que la ley será mucho más útil.

Igualmente consideramos necesario identificar los cibercafés y las zonas Wi-Fi y no solamente las tarjetas, porque Internet no significa impunidad, que eso es lo que quisieran seguramente los *hackers*. Opinamos que la ley no solo debe poder obligar a las operadoras de telefonía, sino también al acceso a Internet, a los mensajes e-mail y a los chats, incluso tendríamos que saber los datos que tiene el moderador del chat. Si los cibercafés o los puntos de acceso público del servicio a la sociedad de la información no se recogen en esta ley habrá una franca impunidad. Y es que, señorías, hay una diferencia entre los secretos de las comunicaciones privadas y la protección de datos —contenida en la Ley orgánica de protección de datos—, no es la misma protección, el secreto de las comunicaciones va más allá y de acuerdo con la práctica común hoy por hoy la Policía Judicial tarda más de cinco semanas en obtener los datos.

Aparte de las enmiendas concretas, cada una con su redacción, yo presento una enmienda de modificación que quisiera que fuese aceptada en su tramitación y que se refiere al artículo 7, apartado 1. Donde dice el artículo 7, apartado 1, que los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado previa resolución judicial los datos conservados en lo que se refiere al artículo 3 de esta ley, en nuestra opinión —y para tener más garantías jurídicas— debería decir que los operadores estarían obligados a ceder al agente facultado los datos conservados a los que se refiere el artículo 3 de esta ley, previa resolución judicial, cuando estos estén vinculados a una comunicación concreta que implique directa e inequívocamente a una persona.

Se trataría de delimitar con la máxima claridad posible la frontera entre lo que constitucionalmente requiere una intervención judicial —que es doctrina del Tribunal Constitucional sobre el secreto de las comunicaciones— y la habilitación que la Ley orgánica de protección de datos otorga a los miembros de la Policía Judicial para la obtención y tratamiento de datos protegidos requeridos en la investigación, prevención, etcétera —artículo 22 de la Ley orgánica de protección de datos— y además tratándose de labores de Policía Judicial sobre la base del artículo 11, apartado 2, de la Ley orgánica de protección de datos, tal y como señalan los informes de la propia Agencia Española de Protección de Datos.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor presidente, la enmienda última a que se ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no está entre las presentadas. ¿Habría posibilidad de que el resto de grupos tuviéramos el texto?

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor Ramírez, tiene que presentarla por escrito.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Yo la planteaba como una enmienda *in voce* con el fin de que tuviera el tratamiento de una transacción, aunque no se refiera a ninguna enmienda de concreto. Pero, lógicamente, yo la aporto a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Hágalo formalmente para así podernos apoyar en cualquier enmienda (*Pausa.*)

Si les parece a los portavoces y en especial al señor Zubia, teniendo en cuenta que no disponemos ahora de mecanismos de reproducción —si lo desea podemos esperar a ello—, podríamos dar lectura en este momento a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular (*El señor Zubia Atxaerandio: Correcto.*)

El señor LETRADO: Se refiere al artículo 7, apartado 1. El texto actual es: «Los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado, previa resolución judicial, los datos conservados a los que se refiere el artículo 3 de esta Ley». La propuesta de la enmienda *in voce* de transacción del Grupo Parlamentario Popular es: Los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado los datos conservados a los que se refiere el artículo 3 de esta ley, previa resolución judicial, cuando estos estén vinculados a una comunicación concreta que identifique directa e inequívocamente a una persona.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Ha llegado el momento de efectuar el turno en contra de las enmiendas. En cualquiera de los casos, tengo que advertir a los portavoces que hay un turno general de portavoces que puede ser utilizado también para oponerse a las mismas. No obstante, abro el turno en contra para quien quiera acogerse a él.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Anticipamos que vamos a aceptar las enmiendas números 13 y 31.

En cuanto al resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en un proyecto de ley en el que ha habido amplio consenso y se han recogido propuestas de todos los grupos, absolutamente de todos en el Congreso de los Diputados, nos encontramos con que el principal grupo de enmiendas —salvo esta nueva, para la que pediríamos más tiempo, si es posible, para intentar llegar a una transacción porque con ese literal no la aceptaríamos— tratan de incluir aspectos referidos a Internet. Hay que tener en cuenta que este proyecto de ley procede precisamente de la Directiva 2006/24, del Parlamento Europeo, que no incorpora el ámbito de Internet, no porque no sea importante, no porque no sea necesario controlar la ciberdelincuencia—de hecho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo están haciendo ya—, sino porque para perseguir los delitos en Internet tenemos que buscar normativas globales,

normativas generales. Es imposible controlar solo desde España las comunicaciones electrónicas en una red de redes mundial, con lo cual, estando de acuerdo con la filosofía de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptar incorporarlas a este ámbito de desarrollo de la normativa en España, puesto que lo único que conseguiríamos sería limitar el desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país —que requiere de un impulso para el futuro y para el bienestar— sin obtener a cambio lo que se pretende con las enmiendas, aunque, lógicamente, estemos de acuerdo con la filosofía que las inspira, pero, repito, quizá no sea el ámbito adecuado, por lo menos a nuestro juicio.

En relación con las enmiendas del Grupo catalán, entendemos que son redundantes en su mayor parte. Se han aceptado gran cantidad de ellas en el Congreso de los Diputados y el texto actual recoge fundamentalmente su filosofía.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Lavilla, para que quede claro a esta Presidencia: ¿ha dicho que admite la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Popular, y la 31 de Congència i Unió? ¿Es correcto?

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: La 13, del Grupo Parlamentario Popular, es una mejora de redacción y la número 31 pretende una mayor garantía jurídica a través de la Agencia de Protección de Datos.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más quiere utilizar en este turno la palabra? (*Pausa.*)

Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el señor Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

El proyecto de ley que nos ocupa, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pretende en definitiva la transposición de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, y precisamente por ello tiene por objeto, como ya se apunta en el propio preámbulo y después se concreta en el artículo 1, la regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados, es decir, a los miembros de los cuerpos policiales, al personal del Centro Nacional de Inteligencia y a los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera; cesión a la que en todo caso —como bien recoge el texto articulado— deberán siempre ser requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves. Tal obligación de los operadores de telecomunicaciones viene justificada —según se recoge también en el mismo preámbulo— por la necesidad de proteger la seguridad pública, y su regulación se ha

efectuado —se añade también en esa exposición de motivos o preámbulo— buscando el imprescindible equilibrio en el respeto de los derechos individuales que pueden verse afectados.

Efectivamente, en el proyecto de ley está en juego una vez más el lograr el punto de equilibrio de ese binomio que conforman seguridad y libertad, equilibrio que, a decir verdad, no nos parecía alcanzado en el texto originario del proyecto pero que, a nuestro juicio, sí que está mucho más logrado en su actual redacción dadas las importantes variaciones introducidas durante la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados, merced a las enmiendas presentadas y aceptadas y a los acuerdos transaccionales —varios— igualmente alcanzados.

Y es así, precisamente, en virtud de esa negociación abierta que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados como se han modificado no pocos artículos del proyecto de ley, y entre otras cuestiones a destacar, hay que decir que se ha acotado el deber de cesión de datos con fines de detección, investigación y enjuiciamiento, ciñéndose exclusivamente, que es lo que contempla el texto actual del proyecto, a los delitos graves, algo que se ajusta más a la jurisprudencia constitucional y europea.

Asimismo, y en relación con el período de conservación de los datos, se ha optado por un sistema que podríamos llamar flexible al fijarse así la obligación de que la conservación cese a los 12 meses, pero pudiéndose ampliar o reducir para determinados datos hasta un máximo de dos años, en caso de ampliación, o un mínimo de seis en el caso de una reducción.

E igualmente importante nos parece el hecho de que se haya finalmente aceptado que el plazo de ejecución de la orden de cesión sea fijado por resolución judicial en vez de por los agentes facultados, que es como se recogía también en el texto originario del proyecto.

Y por no alargarme en exceso quisiera señalar también algo que nos preocupaba desde un principio, y así lo dijimos, pero que también ha sido corregido a lo largo de la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados. Me estoy refiriendo concretamente al artículo 9, que en su redacción originaria de los puntos 2 y 3 estaba rebajando garantías, y con ello, degradando el contenido de la Ley orgánica de protección de datos y la protección que esta precisamente conlleva.

Estimábamos que podíamos estar ante una cuestión de inconstitucionalidad, pero afortunadamente, repito, se ha resuelto favorablemente tras la modificación de ese punto 2 del artículo 9 en el sentido de que el responsable del tratamiento de los datos denegará el ejercicio del derecho de cancelación en los términos y condiciones previstos en la Ley orgánica de protección de datos, y además, con la supresión del punto 3 de dicho artículo merced a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

En lógica coherencia con esa actitud de búsqueda de acuerdo que ha imperado durante la tramitación en el Congreso, y que derivó en que nuestro grupo parlamentario no mantuviera viva ninguna enmienda para la sesión plenaria en dicha Cámara por haberse incorporado de una u otra

manera todas y cada una de las enmiendas allí presentadas, no hemos vuelto a presentar ninguna nueva enmienda en el trámite del Senado, y en consecuencia, es público y notorio que a día de hoy nuestro voto será favorable a la aprobación del texto del proyecto de ley, una aprobación que será definitiva en esta Cámara sin necesidad de debatirse en sesión plenaria dado que actuamos por delegación de la Mesa del Senado, aunque evidentemente volverá al Congreso con las enmiendas que hemos aceptado en el Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Zubia. Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: *Gràcies, señor president.*

Voy a ser muy breve porque, como ya se ha apuntado, estamos ante la trasposición de una directiva europea y porque, además, se trata de un texto que viene muy consensuado del Congreso de los Diputados, donde creemos que se ha trabajado bien. Tal y como ha manifestado el senador Zubia, nosotros también estamos satisfechos del trabajo desarrollado en la medida en que se reforzaban las garantías, que es quizá el punto que más alerta nos tiene cuando se trata de cualquier ley que pueda interferir en la esfera del derecho a la intimidad y otros derechos individuales.

Partimos de la necesidad de articular una normativa adaptada a la lucha contra las nuevas o viejas formas de criminalidad que se han adaptado a los cambios tecnológicos y a los nuevos sistemas de comunicación electrónicos. Pero, como he dicho, era preciso realizar este trabajo dentro del escrupuloso respeto a las libertades individuales, básicas en un sistema democrático; libertades cuyo ejercicio no han de mermar los cambios tecnológicos, sino que, por el contrario, han de facilitar.

Nosotros no estamos de acuerdo con la expresión que ha utilizado el senador Zubia y que también empleó el ministro en la defensa del proyecto cuando dijo que se había encontrado un equilibrio entre las obligaciones que se imponen y los derechos, pues considero que no se debe hablar de equilibrio cuando se trata de derechos, sino que estos han de ser garantizados de forma clara. No obstante si tuviéramos alguna duda en cuanto a si estos derechos han sido o no debidamente preservados, seguramente no votaríamos a favor del proyecto.

De entre estos derechos, consideramos fundamental el derecho a la intimidad, la presunción de inocencia, y sobre todo, el derecho al amparo judicial. Nosotros no estaríamos de acuerdo con actuaciones que no tuvieran amparo judicial, pues eso es justamente lo que permite que haya transparencia a la vez que ofrece garantías al ciudadano de que la Administración no está actuando con impunidad.

Las enmiendas que había presentado nuestro grupo parlamentario ya se habían retirado en el trámite del Congreso de los Diputados; no obstante las mantuvimos aquí para incidir en el hecho de que, para nuestro grupo parlamentario, el tema del amparo judicial es fundamental. De hecho se

trata de enmiendas que venían simplemente a reforzar aquello que la propia ley ya prevé, motivo por el que en este momento las retiramos.

Queremos insistir en el hecho de que para nosotros es fundamental que los datos que se faciliten sean únicamente los previstos en la ley, es decir, referidos a unos delitos cuya gravedad se ha especificado en la propia norma de forma que no se invada el terreno de la intimidad ni de los derechos fundamentales, y por otro lado, que no haya brecha alguna que permita interceptar comunicaciones sin la preceptiva autorización judicial previa.

Mi grupo parlamentario vigilará para que, en la aplicación de la ley —una ley muy técnica—, no haya resquicios que permitan conculcar estos principios fundamentales, pues en ese caso presentaríamos inmediatamente una propuesta de reforma de la ley.

Mi grupo parlamentario ha retirado las enmiendas que tenía presentadas porque consideramos que el consenso al que se llegó en el Congreso de los Diputados era suficiente. En este sentido, y con respecto a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, parece que va a prosperar una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, que consideramos refuerza las garantías, motivo por el que votaremos a su favor. Sin embargo, y por lo que se refiere a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que no tiene posibilidades de prosperar dado que los demás grupos parlamentarios ya han manifestado su oposición a la misma y que en el nuestro propio hay distintas sensibilidades al respecto, nos vamos a abstener. Y es que concretamente nos preocupa que por la vía de una enmienda presentada en el Senado a última hora y de que en realidad se trata de la trasposición de una norma de carácter reglamentario se nos esté colando alguna cosa que no vemos clara, como es concretamente el hecho de que se pueda ampliar vía decreto los preceptos previstos en esta ley. Así se incluye en sus apartados 5 y 6 lo siguiente: ...sin perjuicio de otros datos que puedan ser establecidos mediante real decreto.

Nosotros pretendíamos incluso que esta ley tuviera el carácter de ley orgánica para blindar la posibilidad de que el gobierno de turno pueda modificar lo que para nosotros es la protección de derechos fundamentales. En este sentido no apoyaremos esta enmienda y nos abstendremos. En cualquier caso debo decir que si la enmienda hubiera tenido alguna posibilidad de prosperar, y dada la composición de nuestro grupo parlamentario, en el que también están representados el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, seguramente habríamos votado a favor por respeto hacia nuestros compañeros. Pero visto que no tiene esa posibilidad quiero expresar nuestra prevención ante esta enmienda presentada a última hora que no vemos que garantice de forma clara lo que ha sido objeto de nuestra preocupación durante todo el proceso de tramitación de la ley.

Al margen de esto, señorías, votaremos a favor del dictamen. Por lo demás solo queda expresar mis felicitaciones, pues al margen de estas prevenciones de última hora,

hay un acuerdo fundamental en cuanto a la tramitación de la ley.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bofill.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora doña María del Carmen Granado Paniagua.

La señora GRANADO PANIAGUA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en los últimos tiempos hemos asistido a un espectacular auge de las comunicaciones a través de la telefonía móvil y de Internet que se han consolidado muy rápidamente en nuestro quehacer ordinario. Sin embargo, el fácil acceso, la rapidez y el escaso coste de estos nuevos medios de comunicación, unido al anonimato en el que a menudo se producen, proporcionan un enorme atractivo como vehículos para la consecución de fines delictivos. En estos medios se producen un sinnúmero de actividades delictivas más o menos tradicionales, que no voy a enumerar ahora, pero que están en la mente de todas sus señorías; nuevas formas de delincuencia y nuevos mecanismos para delinquir que exigen de los poderes públicos y de los responsables de mantener la seguridad la adopción de medidas y respuestas que sean efectivas. Es en este contexto en el que se ha revelado como una herramienta fundamental para la persecución de las actividades criminales que se llevan a cabo en estos medios la conservación de los datos producidos en el ámbito de estas comunicaciones. Por eso, desde las instituciones comunitarias se adoptó la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, que nace para dar respuesta a estos problemas y cuyo objetivo principal es posibilitar que los agentes facultados puedan obtener datos que se hayan producido en estos medios y que estén relacionados con una investigación criminal por la comisión de algún delito. Con este propósito se fijan una serie de obligaciones de conservación y cesión de los datos por parte de las operadoras de comunicaciones electrónicas respetando, en todo caso, los derechos individuales que puedan verse afectados como la privacidad y la intimidad en las comunicaciones entre los ciudadanos.

Este proyecto de ley que nos ocupa procede a incorporar la citada directiva comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico; incorporación que tiene un marcado carácter instrumental puesto que se trata de reforzar los mecanismos policiales para la detección, la investigación y la persecución de los delitos.

Señorías, esta ley viene a establecer una mayor seguridad jurídica tanto para los cuerpos policiales como para los operadores. Este proyecto ha llegado a esta Cámara con un alto grado de consenso, como han reconocido sus señorías. Al texto original presentado por el Gobierno se incorporaron en su tramitación en el Congreso de los Diputados un alto número de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, que han supuesto una mejora sustancial del texto y de su objetivo principal, que no es otro

que la lucha contra la delincuencia organizada y su prevención, y además, señorías, se ha ganado en garantías para los ciudadanos.

Tal y como decía, se han producido avances importantes sobre el texto inicial, como ha sido el acotar la conservación de datos únicamente en el caso de los delitos graves, preservando el equilibrio que debe existir entre seguridad y libertad. También se han acotado los agentes facultados para recabar este tipo de información.

Señorías, mi grupo parlamentario quiere agradecer el trabajo de todos y el esfuerzo de la mayoría, que han mantenido el consenso al que se llegó en el Congreso. Por lo que han manifestado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, estamos básicamente de acuerdo en lo fundamental de esta ley y agradecemos la buena disposición que han demostrado.

Me gustaría comentar al portavoz de Entesa Catalana de Progrés que el Grupo Socialista no ha presentado su enmienda a última hora, sino que lo ha hecho en tiempo y forma, de igual manera que el resto de las enmiendas. Además, desde nuestro punto de vista, esta enmienda garantiza perfectamente lo que queremos preservar.

Me gustaría pedir al presidente de la Mesa un receso para poder estudiar la enmienda *in voce* que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.

Por último, señorías, creemos que hemos cumplido con nuestra obligación de transponer una directiva comunitaria que redundará en mayor seguridad para los ciudadanos y en mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia, máxime en un país como el nuestro que ha sido duramente castigado por el terrorismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Granado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ramírez Rodríguez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Es cierto que este proyecto de ley cuenta con un amplio consenso, pero a mi grupo parlamentario le parece perfecto porque, finalmente, creo que la actual redacción no garantiza esa máxima de que no puede haber impunidad en la red. Es decir, si se comete un delito en la red o las redes de comunicaciones es necesario que se pueda investigar y perseguir y, para ello, es imprescindible que se conserven los datos el tiempo suficiente y que se puedan ceder rápidamente.

La Directiva europea 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, sobre esta materia, como todo el mundo sabe, se impulsa a raíz del atentado terrorista del 7 de julio de 2005 en Londres y viene a intentar dotar de los instrumentos legales imprescindibles para la lucha contra el terrorismo y contra la

delincuencia organizada que, como es bien sabido, utilizan las redes de telecomunicaciones para organizarse. Además, también conviene recordar que la directiva europea es un instrumento de armonización, de base y, por tanto, de mínimos, por lo que en cada Estado miembro se pueden adoptar, además, las medidas que se estimen pertinentes para la consecución efectiva y real de los fines previstos en la directiva, que dependerá de las circunstancias y riesgos de cada país.

Por ello, dejando a salvo el secreto de las comunicaciones que tiene su garantía constitucional en la imprescindible autorización judicial, desde nuestro punto de vista se debe reflexionar sobre la conveniencia de distinguir entre los datos protegidos por el secreto de las comunicaciones y los datos protegidos por la Ley orgánica de protección de datos, a la que me referí en mi primera intervención, y articular dos sistemas distintos en la cesión de los mismos, en el marco de una investigación de la Policía judicial, como han dicho el Tribunal Constitucional y la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, y respeto a Internet, desde nuestro punto de vista no basta con conservar los datos de acceso, correo electrónico y voz IP, sino que deben extenderse a otros servicios de la sociedad de la información —*chats*, foros, etcétera—, en el sentido de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Algo parecido ocurre con la obligación de identificación de los titulares de las tarjetas prepago y, además, si se obliga a una identificación a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, pero no se obliga a los operadores a identificar en un plazo razonable las tarjetas emitidas con anterioridad, se generará un mercado negro de tarjetas anónimas que será utilizado, sin duda, por la delincuencia.

Respecto al plazo de conservación de los datos, creemos que son necesarios al menos doce meses para los datos relativos a las comunicaciones por Internet y que bastará con seis meses para los datos relativos a las comunicaciones por telefonía fija o móvil. Respecto al plazo para la cesión de los datos, creemos que 72 horas es un plazo general razonable para una investigación y para los operadores y para los prestadores de servicios, pudiendo reducirse o ampliarse en cada caso según la urgencia y la gravedad de aquella y la complejidad técnica de la identificación.

Por último, con respecto a los plazos de los operadores y prestadores de servicio para adaptarse a las exigencias y obligaciones impuestas por la ley, creemos que se ha de ser realista intentando ser flexibles con los que quieren cumplir y colaborar en la consecución de unas redes de comunicaciones seguras; e inflexibles con aquellos que no entiendan que o se presta el servicio en unas condiciones adecuadas de seguridad o es preferible no prestarlo. Se intentará que el coste sea el menor posible para los obligados pero, en todo caso, es un coste esencial de la prestación del servicio, que no puede servir de excusa para no cumplir con la obligación de conservación y la cesión de los datos, si fuera necesario: seis meses para las obligacio-

nes generales sobre conservación de datos; seis meses para la obligación de identificación de tarjetas prepago nuevas; y doce meses para la obligación de identificación de tarjetas prepago antiguas.

Finalmente, respecto a las enmiendas, votaremos a favor de la enmienda número 22 del Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que no tengamos del todo claro si esta materia debe tener tratamiento legal o reglamentario. En cualquier caso, como muestra de buena voluntad y en la idea de que realmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están demandando este instrumento, votaremos a favor sin perjuicio de que en el trámite en el Congreso de los Diputados se produzca alguna modificación o afinamiento de nuestra postura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido que hagamos una pausa de cinco minutos para estudiar la enmienda *in voce* presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

En consecuencia, señorías, somenzaremos las votaciones al reanudar la sesión. (*Pausa.*)

Se reanuda la sesión.

Aunque habíamos quedado que tras reanudar la sesión se llevaría a cabo la votación, vamos a incumplir lo dicho y haremos lo siguiente. Ha habido una aproximación respecto a la enmienda *in voce* presentada por el Grupo Parlamentario Popular entre los diversos grupos parlamentarios. Por tanto, ruego al señor letrado dé lectura a la redacción exacta de esta enmienda.

El señor LETRADO: El apartado 1 del artículo 7 pasaría a decir lo siguiente: Los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado los datos conservados a los que se refiere el artículo 3 de esta ley en lo concerniente a comunicaciones que identifiquen a personas, sin perjuicio de la resolución judicial prevista en el apartado siguiente. Añado yo que es el apartado 2 actual del proyecto de ley.

(*La senadora Aleixandre i Cerarols pide la palabra.*)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Señor presidente, ruego nos proporcionen una copia a todos los grupos parlamentarios.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor presidente, pedimos votación separada de la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Popular, y de la número 31, de Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría.

En primer lugar, votamos las enmiendas de Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que haremos en dos bloques: por una parte, las números 23 a 30 y 32 y, por otra, la enmienda número 31, que ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas números 23 a 30 y 32.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Como ha quedado anunciado, pasamos a votar la enmienda número 31, de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Quiero recordar que las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés se han retirado.

A continuación votamos la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Socialista, con la corrección anunciada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21 ; en contra, dos; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

La primera votación será de las enmiendas números 1 a 12 y 14 a 21.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Finalmente, votamos la enmienda *in voce*, con las correcciones anunciadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Vamos a votar el dictamen, salvo aquellas partes del mismo que pudieran considerarse ya incluidas y, por lo tanto, aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Se levanta la sesión.

Eran las once horas y diez minutos.

Edita: © SENADO. Plaza de la Marina Española, s/n. 28071. Madrid.
Teléf.: 91 538-13-76/13-38. Fax 91 538-10-20. <http://www.senado.es>.

E-mail: dep.publicaciones@senado.es.

Imprime: ALCAÑIZ-FRESNO'S - SAN CRISTÓBAL UTE
C/ Cromo, n.º 14 a 20. Polígono Industrial San Cristóbal
Teléf.: 983 21 31 41 - 47012 Valladolid
af@alcanizfresnos.com.

Depósito legal: M. 12.580 - 1961